



CAPÍTULO OCTAVO

SANTIAGO Y CIERRA ESPAÑA: ALGUNAS LECCIONES DEL CASO PINOCHET

La vergüenza de Colin Powell / General Pinochet, queda usted bajo arresto por orden de la Audiencia Nacional / Baltasar Garzón, un juez para Hollywood / De los estadios a las caravanas de la muerte: con aliados así, ¿quién necesita comunistas? / Pedro Ewing, matón de la DINA en Madrid / Pinochet aprovecha el funeral de Franco para fichar criminales / El Cóndor pasa...sobre Washington / Escándalo en Foreign Affairs: el caso de la «carta perdida» / Kissinger no viaja tranquilo por culpa de Garzón / Secuelas de los locos años setenta en España / Portugal, esa invasión pendiente / Explosivos norteamericanos y terroristas ¿desinteresados? para vengar a Carrero Blanco / Guerras privadas, espías privados y terror de empresa

En el capítulo anterior hemos visto que la CIA —y toda la inteligencia norteamericana en general— ha sido y es a menudo un fascinante desastre. Que lo que pasa por mano negra a veces no es más que una increíble combinación de imprevisión, incompetencia y desinterés. Por lo menos en determinados países. ¿Nos alcanzará la humildad para entender que podemos haber sido objeto de menos grandes complots de los que nos merecemos?

Y sin embargo a veces también sucede lo contrario, que no se tiene suficientemente presente el alcance de algunos sucesos. En este capítulo vamos a ver cómo uno de los momentos más



oscuros de la historia de la CIA y de Estados Unidos —un momento del que Colin Powell diría que «no nos sentimos orgullosos»— dejó más secuelas en España de las que se perciben a simple vista. Es también una de las ocasiones en que una iniciativa española ha tenido mayores repercusiones al otro lado del Atlántico. Estamos hablando, como no, del caso Pinochet.

El 16 de octubre de 1998, agentes de Scotland Yard pusieron bajo arresto a Augusto Pinochet en Londres, en cumplimiento de una orden de busca y captura internacional dictada por el juez Baltasar Garzón. El entonces senador vitalicio chileno estaba acusado desde 1996 ante la Audiencia Nacional española de varios crímenes que iban de la tortura al genocidio, pasando por el terrorismo.

Aunque Pinochet no llegaría a ser juzgado jamás, los quinientos cuatro días que pasó bajo arresto domiciliario en Londres causaron una conmoción en Chile, donde al antiguo dictador se le retiró la inmunidad, se le interrogó, se le desaforó y se llegó a poner en marcha su procesamiento, sólo impedido por su muerte, el 10 de diciembre de 2006. La decisión de Garzón tuvo también importantes consecuencias en Estados Unidos.

A este país le había llevado décadas sobreponerse a los grandes escándalos de inteligencia de los años setenta (ver anterior capítulo). De todos los asuntos investigados por la prensa y por el Congreso ninguno tan controvertido como la intervención norteamericana en Chile antes, durante y después del golpe de Pinochet contra el gobierno democrático de Salvador Allende. Por mentir al Congreso sobre estos asuntos fue multado con dos mil dólares Richard Helms, el primer director de la CIA sancionado por un delito.

Aún mintiendo, emergen revelaciones tan sensacionales y tan dañinas para la inteligencia y para el gobierno de Estados Unidos que el presidente Gerald Ford mandó a los miembros de la comisión Church en el Senado una carta de su puño y letra pidiendo que sus conclusiones quedaran en la sombra, clasificadas como alto secreto. Ford logró en parte sus objetivos. Pero a partir de ahí el Capitolio deviene un clamor para

cortar todo apoyo al régimen de Pinochet. Curiosamente lidera esta campaña el senador Ted Kennedy, hermano del mismo presidente Kennedy que había sido el primero en encargar maniobras de desestabilización contra Allende.

No es de extrañar entonces que cuando en 1998 el juez Garzón invoca la jurisdicción universal y pide a Estados Unidos todos sus documentos sobre Pinochet, en Washington se desate un terremoto. Si alguien tiene dificultades para entender el por qué del inmenso predicamento de Garzón entre determinados sectores intelectuales, políticos, judiciales y periodísticos norteamericanos, si alguien se pregunta por qué se publican ardientes editoriales a favor de este juez cuando en España se le procesa, sin ni siquiera esperar a que se clarifique si es inocente o culpable, que pruebe a verlo desde el siguiente punto de vista: lo más parecido que ha habido en Estados Unidos a una crisis de memoria histórica es el caso Pinochet. Garzón es un héroe para los partidarios de tirar de la manta y de purgar los excesos de la política exterior de Estados Unidos.

Que no son todos, claro. Un cable confidencial de la embajada de Estados Unidos en Madrid hecho público por WikiLeaks y datado el 14 de febrero de 2005²¹ da cuenta de que han recibido una carta del secretario de Estado para la Seguridad solicitando protección policial para Garzón durante una estancia en Manhattan, invitado por la Universidad de Nueva York. A diferencia de lo que décadas antes había ocurrido con motivo de la visita de los duques de Cádiz, el gobierno de Estados Unidos declinó destinar a ningún agente a la custodia permanente del juez, limitándose a asignar a un miembro del Diplomatic Security Service como referente para la «coordinación, comunicación y resolución de problemas». ¿Les importaba menos la seguridad de Garzón de la que en su día les importó la de la nieta de Franco? Bien es cierto que el viaje de ésta duraba una semana, mientras que Garzón pretendía pasar nada menos que nueve meses en la Gran Manzana y con los escoltas en la puerta. Por otro lado, en un segundo cable de diciembre de 2007,²² el embajador no escatima críticas al juez,

al que considera chulo, cínico, antiamericano y capaz de todo por autopromocionarse. Aún así, el diplomático estadounidense recomienda mantenerse en contacto y atentos a colaborar porque Garzón investiga muchos casos de terrorismo. «Que tenga siempre las puertas abiertas», concluye.

La Administración Clinton, que era la que inicialmente había recibido la petición de la Audiencia Nacional española sobre el caso Pinochet, se resistió a colaborar. Pero el debate interno y externo suscitado por el caso acabó obligando a crear el Chile Declassification Project y a poner un total de veinticuatro mil documentos hasta entonces secretos a disposición, no exactamente de la justicia española, pero sí de Chile y los ciudadanos chilenos.

Se abrió así un resquicio por donde se colaría un equipo de indomables investigadores que durante años han peleado y porfiado para forzar a desclasificar muchos más documentos. El más indomable de todos ellos es Peter Kornbluh, director del Chile Documentation Project (y ahora también del Cuba Documentation Project) del National Security Archive, una organización sin afán de lucro creada en 1985 en el seno de la George Washington University.

Kornbluh es autor de un libro monumental sobre el caso Pinochet que ha llegado a provocar dimisiones en el Council on Foreign Relations,* al parecer instigadas por Henry Kissinger. A lo largo de este capítulo tendremos ocasión de ocuparnos de este sabroso incidente. Por el momento baste decir que el impulso investigador del régimen de Pinochet desencadenado por la iniciativa de Garzón dista mucho de haberse extinguido en Estados Unidos. A día de hoy siguen aflorando nuevos documentos y revelaciones, y todo eso sigue teniendo consecuencias.

* El Council on Foreign Relations es un *think tank* norteamericano especializado en la política exterior de Estados Unidos. Es la organización más influyente en su campo y en su género. Edita la prestigiosa publicación bimensual *Foreign Affairs*.

En la comparecencia que en su día hizo ante la comisión Church, Henry Kissinger admitió cierta labor de zapa y de desestabilización contra el gobierno de Salvador Allende, financiando prensa crítica, socavando la capacidad de Chile de obtener créditos internacionales, etc. En cambio nunca ha admitido ninguna implicación en el golpe de Pinochet ni en ninguna otra acción violenta. Pero no es eso exactamente lo que se deduce de sus conversaciones íntimas con Richard Nixon. Éste ha quedado inmortalizado en las famosas grabaciones secretas del Despacho Oval llamando «hijo de puta» a Allende, pidiendo que le «pateen el trasero» e incluso que le «destruyan».²³ Algo a lo que Kissinger asiente con entusiasmo; ambos están de acuerdo en calificar el régimen de Allende de «fascista» y Kissinger —un judío alemán cuya familia emigró huyendo de Hitler— incluso lo compara con los nazis.

Por su colorido y por su interés vale la pena reproducir literalmente aquí una de las últimas cintas de Nixon en emerger. En ella Nixon y Kissinger comentan con el jefe de gabinete del presidente, Bob Haldeman, las críticas que algunos sectores de la prensa y del Congreso les hacen por sus acciones en Chile. Como se puede apreciar, los tres se toman estas críticas muy a pecho:

KISSINGER: Los hijos de puta nos están culpando a nosotros.

HALDEMAN: ¿Culpando a la CIA? [risas]

KISSINGER: ¿Están culpando a la CIA?

NIXON: ¿Y por qué demonios lo habríamos asesinado?

KISSINGER: Bueno, primero, no pudimos. Estamos...

NIXON: Sí.

KISSINGER: La CIA es muy incompetente para hacerlo. Recuerde...

NIXON: Seguro, esa es la mejor parte...

KISSINGER: Cuando trataron de asesinar a alguien tomó tres intentos...

NIXON: Sí.

KISSINGER: ... y después de eso vivió tres semanas.

Esta grabación contiene algunos puntos oscuros, algunas partes borradas y tachadas, como es preceptivo siempre que se divulga un documento secreto con alusiones demasiado concretas a los servicios de inteligencia y a sus métodos. Pero lo que queda a la vista es bastante esclarecedor. Sólo pueden estar hablando del asesinato del general René Schneider, comandante en jefe del ejército chileno cuando Allende llegó al poder, y uno de los más celosos guardianes de la supeditación del poder militar al poder civil.

Con Schneider en su puesto era impensable un golpe contra Allende. Entonces el sector golpista del ejército hizo planes para secuestrarle, acusar de su desaparición a los extremistas de izquierda y así justificar una oleada de represión que llevara con naturalidad a derrocar al gobierno. O eso por lo menos le dijeron a la CIA en el momento en que ésta les proveyó de fondos y armas.

Es difícil establecer con absoluta certeza qué pasó exactamente el 22 de octubre de 1970, cuando el secuestro de Schneider se convirtió en la práctica en un asesinato. Por cierto, el general murió tres días después de que le dispararan, no tres semanas después, como dice Kissinger. ¿Se le fue a alguien de las manos el complot, el secuestro fue mentira desde el principio, mintieron los golpistas chilenos a la CIA, mintió la CIA a Kissinger, mintió Kissinger al Congreso?

El antiguo secretario de Estado ha llegado a reconocer que el *Track 1*, esto es, el intento de derrocar a Allende por las vías de la desestabilización económica y política, se vio brevemente arropado por el *Track 2*, que, por decirlo con suavidad, consistía en animar a los militares a respaldar el *Track 1* con las armas. Pero según Kissinger este *Track 2* se habría abandonado enseguida, mucho antes de la muerte de Schneider.

En cualquier caso, el grupo que mató a Schneider había recibido armas y no menos de cincuenta mil dólares de la CIA. Ésta trató a toda prisa de desvincularse y de recuperar las armas. Comprar la discreción de los golpistas les costó

treinta y cinco mil dólares más. Lo cual daría cierta razón a Nixon y a Kissinger cuando, partidos de la risa en el Despacho Oval, se quejan de la incompetencia de todo el operativo.

Además la muerte del general provoca toda clase de efectos menos el deseado por la Casa Blanca: no sólo Allende no cae sino que es objeto de aún mayores simpatías. Entonces hay que seguir gastando energía y miles de dólares en tratar de crear condiciones propicias para un golpe de Estado que haga limpienza de un presidente peor que marxista... ¡antiamericano!

Alrededor del 9 de septiembre de 1973, a la CIA le llegan los primeros pálpitos de que el ansiado golpe puede estar por fin en marcha. Según los documentos exhumados en los últimos años, los hombres de Langley estaban más que dispuestos a prestar asistencia, pero no hizo falta ni fue casi posible. Cuando se quisieron dar cuenta ya era Pinochet quien daba órdenes en el Palacio de la Moneda.

Kissinger menciona todos estos asuntos en el último tomo de sus memorias, *Years of Renewal*, donde significativamente insiste en que:

- a) Se trata de un texto escrito antes del arresto de Pinochet en 1998.
- b) Nunca ha considerado oportuno revisar ese texto después.

También insiste en que Estados Unidos no participó en el golpe y en que así lo ha «jurado por Dios» Pinochet en persona, alegando que él siempre quiso tener las manos libres. Washington le comprendía tan bien que remoloneó dos semanas antes de reconocer al nuevo gobierno chileno, dejando que se les adelantaran otros países, mientras por supuesto mandaban a Santiago mensajes secretos de apoyo. La CIA ayudó a financiar *tours* de autopromoción de los nuevos dirigentes chilenos por Europa y por América Latina. Con lo cual, incluso si no hubo participación norteamericana directa en el golpe, a Pinochet y a su ejército les cabían pocas du-

das de que tenían el pleno respaldo de Estados Unidos. Una visión que pronto se extendió por todo el mundo, con todas sus consecuencias.

¿Subestimó Washington la ferocidad de su nuevo y flamante aliado? Sólo en los primeros cuatro días del golpe hubo entre dos mil y diez mil muertos, calculaba a ojo la CIA, frente a los 244 oficialmente reconocidos. Entre esos miles de muertos que se resistían a entrar en el bombo figuraba incluso un periodista norteamericano, Charles Horman. Su caso inspiraría en 1982 una de las películas más famosas de Costa Gavras: *Missing* (en España, *Desaparecido*).

Missing estuvo prohibida en Chile durante toda la dictadura de Pinochet. En Estados Unidos tanto la película como el libro en el que se basa pasaron años retirados de la circulación a raíz de una querrela del embajador norteamericano en Chile durante el golpe, Nathaniel Davis. Desestimada esta y otras demandas, Universal Pictures volvió a distribuir *Missing* con normalidad, aunque no antes del año 2006.

Por lo demás, el baño de sangre del golpe fue sólo el principio. El balance oficial de los diecisiete años de dictadura es de 3.197 muertos o desaparecidos, sólo 201 más que los que perdieron la vida en los ataques del 11-S.

En un primer momento la posición norteamericana era simple: por malo que fuese Pinochet, siempre sería mejor que Allende. Es la época de las alianzas anticomunistas a cualquier precio, una política con la que el lector de este libro ya está familiarizado. Vernon Walters en persona viaja a Santiago para anudar lazos de inteligencia entre la CIA y la Dirección de Inteligencia Nacional chilena, la DINA, establecida en noviembre de 1973 a las órdenes del general Manuel Contreras. Va a ser la policía secreta de Pinochet. En la primavera de 1974 la CIA envía a ocho de sus agentes para entrenar a los de la DINA.

¿Son conscientes esos ocho agentes de que la DINA va a convertirse en uno de los cuerpos represivos más crueles de toda la historia de la América Latina, tanto que la misma

CIA llegará a compararla con una KGB a la que ya no controla ni el ministro de Defensa? ¿Pecaron los norteamericanos de malvados, de indiferentes, de ingenuos o de todo un poco? Manuel Contreras, quien actualmente cumple en Chile veinticinco condenas por secuestros, desapariciones y torturas que suman 289 años de cárcel, llegó a estar brevemente en nómina de la central de inteligencia de Estados Unidos. Al final alguien se dio cuenta de lo indeseable de tenerle como colaborador estable y sólo le pagaron un mes.

A su manera Washington trata de nadar y de guardar la ropa, de colaborar con Pinochet pero sin aparecer demasiado públicamente comprometido con él. Aunque tampoco hay un criterio unánime. Mientras varios asesores de Kissinger le bombardean de análisis y de informes, advirtiéndole del peligro de que semejante engendro de dictador aparezca como demasiado identificado con Estados Unidos, el secretario de Estado se pasa muchas de estas advertencias por las partes menos nobles de su anatomía. En otras conversaciones que quedarían registradas se burla de su propio departamento. En su opinión está lleno de «sacerdotes frustrados» que, al no tener bastantes iglesias donde meterse, se meten ahí.

El problema es que no estamos hablando de violaciones de los derechos humanos aisladas, ni insignificantes ni discretas. Más pronto que tarde la DINA institucionaliza la tristemente famosa Caravana de la Muerte y se lanza a la eliminación física sistemática de adversarios políticos. Y no sólo eso sino que, siempre que puede, trata de involucrar a Estados Unidos en sus esfuerzos.

Nunca demasiado directamente, claro está. Son brutos pero no tontos. Nunca piden asistencia para cometer un crimen, siempre es para otra cosa. Recién dado el golpe pedían tiendas de campaña para alojar a los detenidos, sin mencionar que tenían la intención de torturarlos hasta la muerte. O solicitaban ayuda militar y logística norteamericana a través de terceros países como Brasil, Corea y, por supuesto, la España franquista.

A Pinochet desde luego le interesa la ayuda práctica de Estados Unidos para desbloquear los créditos y las ayudas internacionales a Chile. Pero sobre todo le interesa aparecer frente a amigos y enemigos —y muy especialmente frente a estos últimos— como una dictadura avalada por el imperio, es decir, que las licencias para matar (y para más cosas) que se toma, se las toma con el beneplácito del Tío Sam. «Cuidado conmigo que tengo socios muy poderosos», parece ser el mensaje que Pinochet y Contreras mandan a cualquiera que les desafíe o amenace. Sin duda han tomado buena nota del precedente de Franco en España.

El problema es que Pinochet está menos en la línea de Franco que en la del dominicano Trujillo: es un represor de tal magnitud escandalosa que ni con la mejor voluntad se puede mirar para otro lado. El sufrido asistente para asuntos iberoamericanos William D. Rogers vuelve a alertar a Kissinger de que los abusos de la DINAs son tan enormes que Estados Unidos no puede prolongar indefinidamente su pasividad. Tiene que desmarcarse y/o hacer algo.

Al fin Kissinger accede a pronunciar un discurso sobre los derechos humanos en Chile. Rogers le ha montado un *tour* latinoamericano que en junio de 1976 tiene una parada estelar en Santiago, escenario de una Cumbre de las Américas, una reunión plenaria de la Organización de Estados Americanos (OAS). Los asesores del secretario de Estado le insisten en que aproveche la ocasión para ser muy claro; si se muestra demasiado diplomático o sutil, le advierten, Pinochet no pillará la indirecta. Para que lo entienda bien le explican que Pinochet ha tomado el relevo de Franco como símbolo de la represión de derechas en el mundo.

Kissinger hace una interpretación muy libre de estos consejos. No sólo suaviza el texto de su discurso ante la OAS sino que informa de su contenido con antelación a Pinochet, con el que se reúne en privado para tranquilizarle y dar garantías de que todo esto es pirotecnia diplomática de cara a la galería. Nuevamente por su colorido y su interés, reprodu-

timos algunos fragmentos de la transcripción literal de aquella histórica entrevista entre Kissinger y Pinochet.²⁴

Ambos dignatarios empiezan intercambiando saludos y muestras de amistad. Kissinger agradece la cálida acogida y Pinochet, que no da puntada sin hilo, la atribuye al «amor por la libertad» del pueblo chileno; de ahí que dieran tan bien la batalla contra el comunismo, razona:

Pinochet: Nos encontramos en un estadio más avanzado del mismo conflicto que estalló en la guerra civil española. Y hay que observar que, aunque los españoles trataron de parar el comunismo hace cuarenta años, éste está rebrotando ahora en España.

Kissinger: Hace poco tuve la oportunidad de discutir esta misma cuestión con el rey de España.

Recordemos que estamos en 1976. Pinochet sigue presumiendo de credenciales anticomunistas ante la Casa Blanca. Inmediatamente vienen las quejas: Chile carece de los millones de dólares necesarios para contrarrestar la propaganda comunista mundial, a su juicio la única explicación de que se les acuse tan seguido de violar los derechos humanos.

Kissinger se declara consciente de la «hipocresía» de los que cuestionan a Pinochet: «mi visión personal es que usted es una víctima de todos los grupos de izquierda del mundo». Dicho lo cual trata de templar gaitas: explica que tiene que calmar a la oposición progresista en Estados Unidos para mantener su política de ayuda a Chile, y que para ello necesita poder acreditar algún progreso en el ámbito de los derechos humanos, por supuesto siempre sin «minar» al gobierno de Pinochet, algo que es lo último que él desea...

Incluso planteado así, con tantísimo tacto, Pinochet se molesta. Se queja de que los democristianos le calumnian. También protesta porque se hace demasiado caso a sus enemigos en Washington —no en el Pentágono, admite, pero sí en el Congreso—. Concretamente se queja del excesivo predicamento que a su juicio tiene en el Capitolio un tal Orlando Letelier.

Siguen animadas discusiones regionales. Llega a discutirse con desparpajo la posibilidad de que Chile invada Perú. Kissinger trata de quitárselo a Pinochet de la cabeza. El chileno rezonga: «los rusos apoyan a los suyos al cien por cien, nosotros estamos con ustedes, ustedes son los líderes, pero tienen un sistema más bien punitivo de tratar a los amigos». El americano le da la razón pero le pide que tenga en cuenta que acaban de salir de Vietnam y del Watergate.

En sus memorias, Kissinger recordará este diálogo con mucha cautela. Consciente de las transcripciones que han circulado y de las interpretaciones que han emergido, empieza admitiendo que Pinochet le salió rana a Estados Unidos: «No hay duda de que Pinochet y sus asociados excedieron lo moralmente aceptable una vez en el poder. Medidas como la desaparición de sospechosos de oposición no puede justificarse por el terrorismo practicado por los oponentes de la Junta».

Dicho lo cual el antiguo secretario de Estado carga contra la «amnesia institucionalizada» que ha llevado a olvidar la peligrosidad de Allende en plena Guerra Fría. Insiste en que Estados Unidos no participó en el golpe contra él, pero sí pensaron que tal golpe «salvaba a Chile del totalitarismo, y al Cono Sur del colapso radical». Aún así, asegura que «no aprobábamos los métodos de Pinochet» y que así se lo hicieron saber, reservándose el derecho a «usar nuestra influencia» para garantizar las libertades.

Según este diagnóstico, Nixon y Kissinger querían lo mismo que el Congreso y que la prensa liberal, sólo que discrepaban en el método: «Ellos querían tumbar a Pinochet, nosotros queríamos moderarlo y democratizar su conducta». Entonces Kissinger en su reunión privada con Pinochet en Santiago no se estaba lavando las manos, estaba practicando la alta diplomacia: «La realidad de la Guerra Fría nos impulsó a mantener relaciones constructivas con regímenes autoritarios de Sudamérica, pero siempre ejercimos nuestra influencia para promover la causa de las instituciones democráticas todo lo que

podimos sin dañar intereses fundamentales de Estados Unidos o sin dar alas a la izquierda violenta y radical». Añade que esa sería la política de todas las Administraciones norteamericanas subsiguientes, «incluso de aquellas que se habían llenado la boca con los derechos humanos mucho más que la nuestra», hasta que Pinochet dejó el poder en 1989.

Por lo que sea, la «influencia» norteamericana a favor de la democracia no causó una impresión demasiado honda en Santiago. Con la confianza que da tener amigos en Washington, la DINA de Manuel Contreras extiende su brazo exterior y se lanza a forjar alianzas con otras policías secretas del Cono Sur y con grupos anticomunistas y neofascistas violentos en Estados Unidos y en Europa. Tienen un plan y una gran ambición: cazar opositores a Pinochet en todo el mundo.

La embajada chilena en Madrid se honra con tener en 1975 un agente encubierto de la DINA con responsabilidad para toda Europa Occidental: es el agregado militar Pedro Ewing, encargado de operaciones exteriores de la incipiente Gestapo andina. Ewing fija su cuartel general en el Madrid todavía franquista y se afana en buscar colaboradores en todas las tramas negras locales, igual que ha hecho en Estados Unidos, donde ha reclutado a los sectores más violentos del anticomunismo de Miami. De Madrid salen en 1975 con destino a Nueva York, y no precisamente con ánimo turístico, los hermanos Andrés y Patricio Melgoza, que en su día ya habían participado en el secuestro y asesinato del general René Schneider. El FBI detecta su excursión, concluye que van a por Gabriel Valdés, chileno y subsecretario general de la ONU, y manda recado al secretario general de la ONU de la época, Kurt Waldheim. Waldheim llama a capítulo al embajador chileno y le advierte de que no intenten nada contra Valdés. Los hermanos Melgoza se dan la vuelta y abandonan Nueva York.*

* Parte de estas informaciones proceden de la revista *CounterSpy*, fundada por Philip Agee, un renegado de la CIA que se fue a vivir a Cuba.

Esta secuencia es importante porque se va a repetir más veces, siempre poniendo de manifiesto dos inquietantes pautas: una, que los servicios secretos de Estados Unidos detectaron movimientos de la Junta chilena para eliminar a sus opositores en el exterior, y dos, que en varias ocasiones intentaron y lograron parar estos movimientos...pero no siempre.

Uno de los asesinos más cosmopolitas de la DINA resulta ser norteamericano: se llama Michael Townley, es anticomunista a rabiar, está casado con una chilena y coqueteó con ser agente de la CIA en Chile. Como esto no cuajó, Townley fichó por la DINA. A su servicio ejecutó acciones tan graves como la muerte en Buenos Aires del general Carlos Prats, antiguo vicepresidente de Allende asesinado con coche bomba junto a su esposa, y el atentado en Roma contra el dirigente democristiano Bernardo Leighton y su mujer, que sobrevivieron, pero con secuelas tremendas.

Townley se siente a sus anchas en Madrid. Desde allí contacta con la neofascista Avanguardia Nazionale Italiana, liderada por Stefano Delle Chiaie. Inmediatamente lo recluta para espiar a exiliados chilenos en Italia (así se gesta el atentado contra Leighton), a cambio de tener en Chile un santuario y una base de entrenamiento. Delle Chiaie llegará a entrevistarse personalmente con Manuel Contreras y con el mismísimo Pinochet en noviembre de 1975, aprovechando el viaje de ambos a Madrid para asistir al funeral de Franco.²⁵

Ese mismo año Contreras toma la decisión formal de crear una red anticomunista a nivel de todo el Cono Sur: la Operación Cóndor. Organiza una gira internacional para vender la idea y la primera parada es en Washington para ver

CounterSpy se publicó entre 1973 y 1984 y durante ese tiempo desveló numerosa información secreta de la agencia, siempre desde un punto de vista muy crítico, casi destructivo. Se les llegó a acusar de provocar el asesinato de agentes al desvelar públicamente su identidad. Hoy en día es casi imposible encontrar ejemplares de *CounterSpy*. Los que nosotros hemos consultado se guardan en los archivos de la CIA.

a Vernon Walters, por aquel entonces director adjunto de la CIA. ¿Hablaron de Cóndor o del tiempo? A Contreras probablemente le daba igual; a él lo que le interesaba era poder decir a sus interlocutores en los otros países (en un primer momento, Argentina y Uruguay) que venía de ver a Walters.

Oficialmente Cóndor estaba diseñada para coordinar acciones encubiertas de espionaje de comunistas y otros exiliados, tanto en América como en Europa. Pero en sus fases más avanzadas figuraban proyectos de asesinato. Pensaban abatir lo mismo a terroristas ilustres como Ilich Ramírez Sánchez, alias Carlos el *Chacal*, que a opositores democráticos y absolutamente pacíficos.

Cuando la CIA descubre la que se está montando toma medidas para pararlo. Informa a los gobiernos de los países donde los atentados van a tener lugar —básicamente Francia y Portugal— para que llamen al orden a la embajada chilena y así se aborte todo, como pasó con el viaje de los hermanos Melgoza a Nueva York. En vista del éxito, la DINA asegura a los franceses que, aunque no renuncian a operar en Europa, respetarán su territorio. Y ordenan a Michael Townley y a su mujer que vuelvan a casa, Pero primero se dan una vuelta por Madrid, donde en diciembre de 1976 el jefe auxiliar de la DINA, el coronel Espinosa, despachará a Townley con órdenes de infiltrarse en un congreso de la Internacional Socialista y asesinar a Carlos Altamirano. «¡Mátalo, mátalo!», parece que la aullaba por teléfono. No pudo ser porque el dirigente socialista chileno tenía «demasiada seguridad».²⁶

No está claro cuánto duró exactamente la Operación Cóndor ni el número preciso de sus víctimas. Una de sus postreras actuaciones, el 12 de junio de 1980, fue el secuestro de cuatro líderes montoneros argentinos en Lima. De allí se les trasladó a Argentina. A tres de ellos no se les volvió a ver nunca y el cuerpo de la cuarta, Noemi Esther Gianetti, aparecería por sorpresa en un apartamento de Madrid.²⁷

Pero sin duda el asesinato más famoso y más atrevido de la DINA, el que marcó a la vez el cénit y la desbandada de la

organización, fue el de aquel tal Letelier cuyo predicamento en Washington tanto irritaba al dictador chileno en vísperas de la Cumbre de las Américas. Orlando Letelier, antiguo embajador y varias veces ministro de Allende, que sobrevivió al golpe pero pasó un año retenido y padeciendo torturas hasta que la presión internacional obligó a liberarle, murió en atentado terrorista el 21 de septiembre de 1976, apenas tres meses después de que Pinochet se quejara de él a Kissinger. El atentado consistió en una bomba adosada a su coche que estalló en pleno centro de la capital de Estados Unidos, a pocas manzanas de la sede del Departamento de Estado. La explosión se oyó desde ahí.

Pecieron en el acto Letelier y su ayudante, la ciudadana norteamericana Ronni Moffitt. Se salvó el marido de Ronni, Michael, que también viajaba en el coche pero en los asientos de atrás. Peter Kornbluh nos recuerda con solemnidad que este fue «el atentado terrorista en suelo norteamericano más importante hasta el 11-S».

También uno de los menos sutiles. Sólo unos meses antes, Michael Townley y un colega suyo de la DINA, Armando Fernández Larios, se habían presentado en la embajada norteamericana en Asunción, Paraguay, con identidades falsas y exigiendo visados para entrar en Estados Unidos. Contaron que tenían una reunión en Washington con Vernon Walters. El embajador en Asunción resultó ser en ese momento un viejo conocido nuestro, el antiguo responsable del Departamento de Estado para España y Portugal (y gran admirador de Enrique Tierno Galván), George Landau. Por supuesto, Landau no tiene manera de comprobar en ese mismo instante si en realidad esos dos van o no van a ver a la CIA. Pero como no se fía, con una mano les da los visados y con la otra se guarda copia de los pasaportes, que remite inmediatamente a Walters.

Cuando Walters dice que ni el uno ni el otro le suenan de nada, Landau sugiere cancelar los visados y denegarles la entrada en Estados Unidos. Informada la DINA, aborta toda la operación. Townley y Larios regresan a Chile.

Pero no por mucho tiempo. Sólo tres semanas después vuelven a la carga, hay que decir que sin romperse demasiado la cabeza. Townley entra tranquilamente en Estados Unidos con nombre y con pasaporte falsos. Se mete por el aeropuerto JFK de Nueva York, donde ya le está esperando Larios (que ha entrado por Washington) para llevarle a conocer a los matones anticastristas de New Jersey. De ellos va a venir el apoyo logístico para cometer un atentado terrorista a catorce manzanas de distancia de la Casa Blanca.

Durante cerca de veinte años la versión oficial será que los norteamericanos no se enteraron de los planes de la DINA para matar a Letelier hasta que ya no tuvo remedio. Y es cierto que nadie en Washington se esperaba semejante atentado en sus narices. Pero si algo demuestra la abundante documentación exhumada es que para entonces la Administración Ford, y singularmente Henry Kissinger y los hombres de la CIA, tenían suficiente conocimiento previo de la vocación terrorista de Cóndor. Si cínicamente calcularon que esa vocación nunca se manifestaría en el territorio de Estados Unidos se equivocaron de medio a medio. Y luego trataron de ocultarlo regateando información a las familias de las víctimas.

Ya hemos visto que las atrocidades de Cóndor llevaban tiempo sembrando la alarma en el Departamento de Estado entre varios asesores de Kissinger que luchaban por convencerle de que había que hacer algo. Sus esfuerzos han quedado documentados por ejemplo en un cable que el 4 de junio de 1976 mandó el Departamento para América Latina a todas las embajadas del Cono Sur, preguntando qué se sabía de la red criminal internacional urdida por Manuel Contreras.

La respuesta de los embajadores fue desigual, pero suficientemente preocupante como para que a finales de julio tanto el Departamento de Estado como la CIA se empezaran a temer una oleada de asesinatos. Kissinger fue informado el 3 de agosto. En ese momento el temor no era tanto encontrarse con muertos en las calles de Washington como que los burdos crímenes de Pinochet dañaran la imagen de Estados Unidos,

su protector y aliado. Los asesores del secretario de Estado le instaron perentoriamente a cortar en seco la formación de un bloque de derecha regional (y terrorista) en el Cono Sur.

Surge la idea de mandar un cable a todos los embajadores norteamericanos en los países de la Operación Cóndor para embarcarlos en una protesta sincronizada ante los respectivos gobiernos. Tienen que transmitir el mensaje de que Estados Unidos se opone a estas aventuras y que no las tolerará. Además, en medio de este debate llega la información del embajador Landau en Paraguay con los dos elementos de la DINA que tratan de entrar en Estados Unidos con pasaportes falsos y con el no menos falso pretexto de reunirse con Vernon Walters.

El 23 de agosto se acaba decidiendo que los embajadores en Chile, Argentina y Uruguay formulen su protesta. Algunos de ellos se resisten. David Popper en Chile se niega a hablar del asunto directamente con Pinochet, argumenta que éste se va a enojar tanto que será todo inútil, y sugiere en cambio que la CIA haga una gestión con Contreras, además de que él no ve un problema tan grave ni tan inminente etc. Observemos que es una situación muy parecida a la que se había vivido en España cuando el Departamento de Estado sopesaba pedir clemencia para los condenados del Proceso de Burgos y el embajador se dedicaba a poner trabas y a dar largas.

Pero a diferencia de lo sucedido en España, donde el Departamento de Estado se impuso a las reticencias de los diplomáticos, en este caso ganaron los partidarios de no hacer nada. Finalmente la orden a los embajadores se abortó. Ninguno protestó ni lanzó la menor advertencia ante los gobiernos de la Operación Cóndor. Con tan mala fortuna que la orden de *no further action* (no hacer nada más) llega a las embajadas el 20 de septiembre de 1976, sólo un día antes de que Orlando Letelier y Ronni Moffitt salten por los aires en mitad de Washington.

Por supuesto no era esta la secuencia buscada por Estados Unidos. Pero, ¿pudo Estados Unidos haber impedido ese atentado sólo con hacer caso a sus propios analistas? En en-

trevista personal con la autora de este libro, Peter Kornbluh opina que sí. A la misma conclusión llegaría el historiador británico y especialista en América Latina Kenneth Maxwell, durante décadas ilustre miembro del Council on Foreign Relations y colaborador habitual de *Foreign Affairs*. Allí publicó en 2003 una reseña del libro de Kornbluh que, basándose en la documentación sacada a la luz por este último, analizaba los puntos oscuros de la relación de Kissinger con Pinochet en el marco de la Operación Cóndor.

La reacción a esta reseña fue fulminante, y dio pie al famoso «caso de la carta perdida», protagonista de un considerable revuelo periodístico y académico. El antiguo asesor y eterno hombre de confianza de Kissinger, William D. Rogers*, escribió una refutación de la reseña de Maxwell, acusándole de «sesgo ideológico» contra el antiguo secretario de Estado. *Foreign Affairs* publicó la refutación de Rogers y la respuesta de Maxwell a la misma. Este duelo epistolar tuvo un final abrupto cuando *Foreign Affairs* decidió publicar una segunda carta de Rogers pero en cambio ya no admitió una nueva réplica de Maxwell, dejando pues que el hombre de Kissinger —quien nunca se personó abiertamente en el debate— tuviera la última palabra. Agraviado, Maxwell presentó la dimisión.

De eso ya han pasado unos cuantos años, siete en el momento de escribirse este libro. A Maxwell no le ha ido mal desde que dejó el Council on Foreign Relations. De allí se fue a la Universidad de Harvard y al David Rockefeller Center for Latin American Studies. Aún así, cuando nosotros le preguntamos por el «caso de la carta perdida» su indignación rebrota intacta: «dimití por la negativa de la dirección de Foreign Affairs a permitirme responder a la última carta de Rogers, que yo veía como un ataque contra mi integridad; entonces conté mi versión en el David Rockefeller Center». ²⁸

* Rogers también fue hasta su muerte, acaecida en 2007, vicepresidente de Kissinger Associates, la consultoría privada de Kissinger.

Una de las cosas que más sublevan al profesor Maxwell es que el bando de Kissinger tratara de descalificar sus críticas etiquetándole de izquierdista radical: «yo sólo traté de hacer una reseña objetiva del libro de Kornbluh, nada en mi texto era un ataque ideológico gratuito contra Kissinger, aunque él y Rogers hayan tratado de presentarlo así». Asegura que él nunca ha sido precisamente un fan de Salvador Allende: «nadie sale bien parado de esta historia», subraya. Y añade que, en su opinión, si hoy en día nadie recuerda las miserias de Allende se debe en gran medida a los errores de Kissinger y a la negativa de este último a admitirlos. Con lo cual sería peor el remedio que la enfermedad: «negándolo todo, Kissinger sólo fortalece las sospechas sobre sus acciones...y sus inacciones».

La cuestión es: ¿quién tuvo la culpa de que los embajadores norteamericanos no protestaran por la Operación Cóndor y de que el asesinato de Letelier no se abortara? Kissinger y Rogers siempre han alegado que fue una cuestión de falta de coordinación, de tener otros asuntos en la cabeza, de mala suerte. Incluso se ha tratado de negar que fuera el propio secretario de Estado quien diera la delicada orden de parar la protesta diplomática.

Sin embargo, nuevos documentos aparecidos incluso con posterioridad a la aparición del libro de Kornbluh y a la polémica entre Rogers y Maxwell vuelven a dejar en evidencia a Kissinger. Se encontró por fin la carta perdida: un cable fechado el 16 de septiembre de 1976 —cinco días antes de morir Letelier— en Lusaka, donde el secretario de Estado se encontraba de viaje, y firmado por su asistente Harry Shlaudeman. Este cable dice textualmente que el secretario «ha ordenado que no se emprendan más acciones en este ámbito» (*no further action*).²⁹

Era la pieza que faltaba en el rompecabezas. «Por fin sabemos lo que ocurrió», analiza Kornbluh, «el Departamento de Estado puso en marcha un esfuerzo para desbaratar una Murder Inc (Asesinatos S.A.) en el Cono Sur, y Kissinger, sin

dar ninguna explicación, abortó este esfuerzo». ¿Por error, por inconsciencia, por arrogancia? Imposible saberlo, pues Kissinger sigue a día de hoy sin dignarse a dar ninguna explicación más que las que ofreció en sus memorias, como él mismo dice, escritas antes del arresto de Pinochet por orden de Garzón. Y nunca vueltas a revisar después.

Hemos contado el «caso de la carta perdida» con un cierto detalle para que el lector aprecie hasta qué punto la cuestión chilena sigue siendo un tema candente en Estados Unidos. Y eso que innegablemente el caso Letelier envenenó las relaciones entre los dos países —Pinochet y Contreras tratarán de defenderse culpando a la CIA del asesinato— y empezó a minar su alianza. De 1978 a 1988 Washington evoluciona hacia el rechazo de la dictadura de Pinochet, que significativamente acaba un año después.

Y en 1998 llegó Garzón. «Cuando supe del arresto de Pinochet, mi primer pensamiento fue Dios existe», declararía Murray Karpen, el padre de Ronni Moffit. Aunque, como ya hemos apuntado antes, la Casa Blanca de Bill Clinton distaba mucho de compartir este entusiasmo. En el seno de la Administración se vivió un tumultuoso debate entre los que estaban a favor y en contra de abrir la caja de los truenos. Thomas Blanton, el prestigioso director del National Security Archive, llegaría a denunciar que se estaba «blanqueando la Historia». Por lo demás, las familias de las víctimas ya no se conformaban con la desclasificación de documentos secretos. Inspirados por el juez español, querían que también el gobierno de Estados Unidos emprendiera acciones legales contra Pinochet, en defensa de los muertos y desaparecidos norteamericanos.

Bill Clinton dilató y dilató su respuesta y acabó pasándole la pelota a su sucesor, George W. Bush. Éste dejó claro que Washington no tenía ninguna intención de pedir el procesamiento de Pinochet. Aunque no se dio carpetazo directo al tema, simplemente se habló de una «investigación en curso» que al parecer todavía dura.

Sin que de esos polvos dejen de venir notorios lodos. En

fecha tan señalada como el 10 de septiembre de 2001, dos de los hijos del general René Schneider se querellaron contra Kissinger y contra el antiguo director de la CIA, Richard Helms. El 13 de noviembre de 2002 once damnificados por la oleada de violencia que siguió al golpe contra Allende interpusieron una segunda querrela contra Kissinger y contra el gobierno de Estados Unidos. Todo ello a consecuencia de la iniciativa de Garzón.

¿Significa eso que un juez de Jaén puede haber echado a rodar una bola de nieve que algún día lleve a todo un Henry Kissinger a sentarse en el banquillo de los acusados? Peter Kornbluh y Kenneth Maxwell —pues a los dos se lo hemos preguntado— no lo dan por hecho pero tampoco lo descartan: Kissinger ya tuvo que abandonar una vez precipitadamente París cuando, en mayo de 2001, un fiscal francés mandó a su hotel una citación para testificar en un caso de desaparecidos durante el golpe en Chile. Su testimonio fue salir en el acto del país. En febrero de 2002 también canceló un viaje a Brasil, donde tenía que recoger un premio, porque le informaron de que allí podían pedirle cuentas del caso Schneider. Desde entonces el que fue todopoderoso secretario de Estado de Estados Unidos no viaja a ningún país extranjero sin que sus asesores legales le garanticen que no hay moros en la costa. Después de todo, si Pinochet no hubiese viajado a Londres otro gallo le habría cantado.

Qué gran triunfo, qué gran orgullo para España tener un potencial impacto tan enorme en el saneamiento democrático de otros países...más incluso que en el propio. Pues la transición democrática española no tiene nada que envidiar en esqueletos ocultos a la chilena. Incluso guardan algunos esqueletos compartidos. Tramas violentas que un día zumbaron alrededor del poder pero que una vez descabezado éste no se volatizaron en el aire, sino que siguieron —y a veces todavía siguen— su propia y criminal inercia.

Ya hemos comentado como los hombres de la DINA encuentran en 1975 en Madrid un cómodo santuario para el

terrorismo de extrema derecha. El 2 de abril se había celebrado en Barcelona la primera cumbre de la Internacional Negra, con asistencia de elementos franquistas incontrolados, fascistas, neonazis y propalestinos violentos. Entre todo este mejunje ideológico destaca Luis Antonio García Rodríguez, a quien *Counterspy* señalará como el enlace entre el Ejército para la Liberación de Portugal (ELP) y la policía secreta española. Otras fuentes prefieren insistir en su condición de alto responsable de la Internacional Negra y de cabecilla de la Guardia de Franco en Barcelona.³⁰

Son los años de pasión de ETA, del GRAPO y de un sinnúmero de grupos y grupúsculos que practican un terror tan cotidiano como desafortado. Es como la tercera reencarnación de la guerra civil: primero la libraron los soldados, luego los espías, finalmente los terroristas. Algunos llegan a preguntarse en voz alta si la Península Ibérica no se estará convirtiendo en «el laboratorio de la guerrilla urbana europea».³¹

El panorama es tan desolador y está tan enmarañado que ya a duras penas se sabe quién es quién. Un antiguo agente secreto español, Luis González-Mata, escribe incluso un libro, que se publica en París, afirmando con desparpajo —y con algo de credibilidad— que los servicios secretos españoles, herederos del SECED y llenos de paladines de la involución franquista, han estimulado en secreto movimientos terroristas de izquierdas como el del MIL o el del FRAP, se supone que para tener excusa para la violencia de «los otros». Según el tal González-Mata, la CIA y la inteligencia francesa habrían hecho lo mismo. Nadie pone la mano en el fuego por que el GRAPO no sea en realidad una organización de ultraderecha caracterizada de ultraizquierda.

Llegado este punto resulta enormemente difícil distinguir la realidad del bulo y de la propaganda amiga o enemiga. A menudo los esfuerzos de interpretación no hacen sino acabar de complicar las cosas, pues tratan de dar sentido a lo que no lo tiene, o no lo tiene globalmente. Por un lado tenemos a una serie de profesionales del extremismo tratando de bus-

carse el espacio y la vida. Por otro a una serie de gobiernos y de servicios secretos que se han acostumbrado a que su política abierta sea sólo la novena parte visible del iceberg de su política encubierta. Los unos porque acaban de salir de una dictadura, los otros porque están en el pico de la Guerra Fría, todo el mundo parece tener una buena excusa para continuar la diplomacia por otros medios, más sibilinos pero no menos siniestros que una confrontación bélica convencional.

En España hay un terrorismo oficial que el Estado combate, que es el de ETA, y luego están las tramas negras locales y sus múltiples alianzas extranjeras. Según la Biblia de los agentes de la CIA renegados, *CounterSpy*, la DINA chilena no fue la única que utilizó España como centro de reclutamiento y de solaz. El embajador estadounidense Robert Hill, al que no dudan en señalar como agente de la CIA, se habría puesto allí en contacto con dirigentes de la Triple A argentina para armar su propia guerrilla anticomunista en el Cono Sur.

Siempre según *CounterSpy*, en la primavera de 1976 diez mil mercenarios del Ejército por la Liberación de Portugal (ELP) que en septiembre de 1974 tenían que haber apoyado a Antonio Spínola se disponen a invadir el país desde el sur de España. Su programa es simple: «liberar Portugal del marxismo a través del asesinato político, el terrorismo selectivo, el sabotaje y la guerra psicológica». Los analistas de *CounterSpy* advierten que nada de esto habría sido posible «sin el apoyo implícito del gobierno español». A su modo de ver la implicación española con el ELP «refleja en varios aspectos los propios problemas españoles: un gobierno reaccionario y arcaico sostenido por incontrolables extremistas de derechas», que no vacilan en aunar fuerzas con viejos nazis, miembros de la Internacional Negra o «mercenarios norteamericanos con pasaporte guatemalteco empleados por la empresa Tecno-Motor, propiedad de Mariano Sánchez Covisa, jefe de los Guerrilleros de Cristo Rey».

Ya hemos advertido que hay que tener cierta cautela en el manejo de las informaciones de *CounterSpy*, cuya neutrali-

dad y buena fe son discutibles. Pero en este caso es interesante ver cómo *CounterSpy* ofrece un organigrama completo de un posible golpe de Estado que más bien parece, porque lo es, un organigrama de empresa. La CIA sería aquí el paraguas de un complejo entramado en el que participarían los servicios secretos de Portugal, Brasil, España, Israel, Alemania y Francia; compañías como la SERD, propiedad de la familia Franco; la ya citada Tecno-Motor y el Banco d'Avilla, donde se nos asegura que guardaban su dinero los ex gerifaltes nazis; los Guerrilleros de Cristo Rey, etc.

Por cierto que aquí se cruzan los caminos y las sospechas de *CounterSpy* con los de la intrépida investigadora del 23-F, Pilar Urbano. ¿Se acuerdan de Frank Carlucci, al que Urbano señalaba como «hombre oculto» de Alexander Haig en Madrid y como ex director de operaciones clandestinas de la CIA con los presidentes Nixon y Carter? Pues según el boletín de los espías renegados Carlucci también tuvo un papel estelar en la intentona portuguesa. Otro detalle legendario es que cuando el presidente Kennedy fue informado en 1961 de la muerte de Patrice Lumumba, el primer gobernante del Congo tras la independencia de Bélgica, su primera reacción fue preguntar «dónde está Frank (Carlucci)». Por lo demás, la Historia dice de Carlucci que llegó a ser secretario de Defensa con Reagan y que como tal apadrinó y promocionó a un entonces joven Donald Rumsfeld.

Si damos crédito a todo esto, y además lo relacionamos con informaciones independientes pero curiosamente coincidentes —como aquella pregunta en apariencia absurda que en Yaserías le hacen a Lidia Falcón, de si en su viaje a Portugal, precisamente por estas fechas, detectó algún tipo de alianza espuria entre el ejército, los comunistas y ETA...—, habrá que concluir que las fronteras físicas e incluso ideológicas ya van siendo lo de menos. La diferencia entre la acción encubierta de los gobiernos y de las organizaciones terroristas se diluye. Y las confrontaciones se internacionalizan tanto como se privatizan, desafiando todo análisis y a veces in-

cluso toda lógica. Aventuras como la Operación Cóndor dejan una estela de iluminados y mercenarios dispuestos a seguir haciendo la guerra por su cuenta y/o al servicio del mejor postor.

Que una cosa no es necesariamente incompatible con la otra. En España se había hablado, en vida de Luis Carrero Blanco, de encargar la guerra sucia contra ETA a la mafia marsellesa y de que la financiaran empresarios vascos. Como un impuesto revolucionario al revés. Carrero Blanco rechazó la idea pero hay quien sostiene que la venganza por su atentado, el asesinato de uno de sus asesinos, se ajustó bastante a esta pauta.³²

Un oficial retirado del ejército español aseguraba en 2003 en una entrevista al diario español *El Mundo* —manteniendo su identidad oculta— haber participado en el atentado que el 21 de diciembre de 1978 acabó con José Miguel Beñarán, *Argala*, el etarra más famoso y más prominente de los que mataron a Carrero Blanco.³³ Tres años después de la Operación Ogro, Argala presumía de su impunidad y de su éxito ante el corresponsal en Madrid de *The Times*. Sólo dos años más tarde, el 21 de diciembre de 1978, saltaban por los aires él y el Renault-5 de color naranja con el que se movía por el sur de Francia. Allí le habían detectado un grupo de siete oficiales del ejército español descontentos con la ley de amnistía de 1977, y dispuestos a todo para vengar a su almirante.

Según este antiguo oficial, la muerte de Argala fue un acto de puro patriotismo desinteresado, sin cobrar un duro de nadie —es más, habían tenido que pedir un crédito personal al Banco Central para financiarse— y comprando las armas y los explosivos (de origen norteamericano) «en el mismo sitio donde las compraba ETA».

El atentado lo reivindicó el Batallón Vasco Español (BVE), pero esto no tenía al parecer mucha importancia: «BVE, ATE, Triple A... Eso sólo son siglas, nombres que van saliendo y que se van utilizando conforme se necesitan». Para este militar, lo importante era que «nos encontrábamos en

medio de una guerra, una guerra sucia, una guerra terrorista, y él, Argala, era nuestro enemigo, había asesinado a nuestro presidente y nosotros teníamos la obligación legal, moral y natural de pagarle con la misma moneda».

Pero no sólo ellos, pues el grupo, formado por el capitán de navío y oficial de inteligencia naval Pedro Martínez, más conocido por Pedro el Marino, aglutinaba ultraderechistas del interior y del exterior, como Jean Pierre Cherid, ex miembro de las OAS, la organización terrorista de extrema derecha francesa que combatió la independencia de Argelia y que históricamente se había movido por la Península Ibérica bajo la protección del franquismo; el argentino José María Bocardó, ex miembro de la Triple A, y el italiano Mario Ricci, discípulo neofascista de aquel Stephano Delle Chiaie a quien Augusto Pinochet estrechó la mano durante los funerales de Franco.*

Fueron estos elementos extranjeros los que localizaron el escondite de Argala en la ciudad francesa de Anglet y lo pusieron a punto de caramelo para la venganza de los militares españoles. Estos se pelearon por ver quién tenía el honor de poner la bomba y de detonarla, y años después todavía insistían en el orgullo de haber hecho todo esto sin el respaldo de nadie, a diferencia del GAL: «A nosotros no nos apoyaba nadie y actuamos por patriotismo, en los GAL el gobierno estaba detrás de las acciones, y además, todos se movían por dinero».

Nuestro viejo amigo Wild Bill Donovan, el intrépido y excéntrico fundador de la CIA —el que quería arrojar murciélagos vivos sobre Tokyo—, acarició en su día la propuesta

* Delle Chiaie admitió ante la justicia italiana haber actuado contra etarras en colaboración con agentes de las fuerzas de seguridad del Estado español que según unas fuentes podrían ir por libre y según otras desempeñarse como verdaderos terroristas de Estado. Asumió un atentado con bomba en diciembre de 1978 que difícilmente puede ser otro que el que acabó con la vida de Argala.

de que Estados Unidos tuviera una red de inteligencia no pública, sino privada. ¿Otra idea de bombero de las suyas o fue un visionario? ¿Han sido la Operación Cóndor, el GAL, etc, el caldo de cultivo y los precursores de los modernos mercenarios de Blackwater? ¿O de peripecias como la de Duane R. Carridge, un ex agente de la CIA vinculado a las acciones encubiertas en Chile y en el Irán-contra, que dejó la agencia hace veinte años y ahora gestiona su propia red privada de espías, operativa en Pakistán y Afganistán, y cobra contratos millonarios de la Casa Blanca y del Pentágono, a los que surte de devastadores informes sobre lo que «de verdad hay que hacer para machacar a los enemigos de América»?³⁴ ¿De los ejércitos, los espías y los terroristas de Estado, a los ejércitos, los espías y los terroristas de empresa?